



Transparencia presupuestaria y de compras/contrataciones a nivel subnacional en Argentina

Marcelo Capello

Profesor Titular de la Facultad de Ciencias Económicas

*Universidad Nacional de Córdoba
Argentina*

ORCID: [0009-0000-9478-5723](https://orcid.org/0009-0000-9478-5723)

Vanessa Toselli

Profesora Asociada de la Facultad de Ciencias Económicas

*Universidad Nacional de Córdoba
Argentina*

ORCID: [0000-0002-6019-2767](https://orcid.org/0000-0002-6019-2767)

Paula González

*Investigadora del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana
(IERAL)*

Argentina

ORCID: [0000-0002-0259-8398](https://orcid.org/0000-0002-0259-8398)

RECIBIDO: 11 de marzo de 2024

ACEPTADO: 12 de septiembre de 2024



RESUMEN:

El artículo analiza el nivel de transparencia en materia presupuestaria y de contrataciones públicas de los municipios más poblados de la República Argentina, medido a través de un índice sobre los sitios web, tomando como referencia la experiencia de la Universidad Autónoma de Barcelona. El relevamiento se realizó cinco años consecutivos, de 2019 a 2023, permitiendo conocer la evolución de la transparencia y cuáles son los aspectos en que el desempeño del conjunto de los municipios presenta peores resultados. Del índice general compuesto por ocho ejes, el análisis releva que los ejes sobre presupuesto y contrataciones/licitaciones públicas son aquellos en que el desempeño ha sido más bajo y con menor evolución positiva. A partir de esta observación, se analizan en detalle los indicadores que conforman estos dos ejes para realizar un diagnóstico sobre cuáles serían las políticas necesarias a llevar a cabo para efectivamente avanzar y/o mejorar hacia una gestión más transparente de los recursos públicos, principio fundamental para los gobiernos democráticos modernos incluido los de nivel municipal.

PALABRAS CLAVE: Transparencia, presupuesto, contrataciones, compras públicas.

CONTENIDOS: 1.- Introducción. 2.- Marco Teórico. 3.- Transparencia en Argentina. 4.- Metodología. 5.- Resultados. 6.- Herramientas tecnológicas para la transparencia. 7.- Comentarios finales - Bibliografía.

Budget and purchasing/contracting transparency at the subnational level in Argentina: evolution between 2019-2023

ABSTRACT: The article analyzes the level of transparency in budgetary matters and public purchases/contracting in the most populated municipalities of the Argentine Republic, measured through an index on websites, taking as reference the experience of the Autonomous University of Barcelona. The survey was carried out five consecutive years, from 2019 to 2023, allowing us to know the evolution of transparency and which are the aspects in which the performance of all municipalities presents the worst results. Of the general index composed of eight axes, the analysis reveals that the axes on budget and public contracts/tenders are those in which performance has been lowest and with the least positive evolution. Based on this observation, the indicators that make up these two axes are analyzed in detail to carry out a diagnosis on what policies would be necessary to carry out to effectively advance and/or improve towards transparent management of public resources, a fundamental principle for modern democratic governments including those at the municipal level.

KEYWORDS: Transparency, budget, contracting, public purchases.



1.- Introducción

El presente trabajo surge del análisis del relevamiento realizado en cinco periodos consecutivos (desde 2019 a 2023) sobre aspectos centrales vinculados con la transparencia del Sector Público Municipal, tomando como referencia los principales gobiernos de tercer nivel de la República Argentina. Si bien el indicador abarca ocho grandes categorías de análisis, para los fines de este trabajo se profundizará en dos de ellos: Presupuesto y Contrataciones/Licitaciones. Los resultados del relevamiento que respaldan este estudio son especialmente significativos para analizar, diseñar y evaluar planes o acciones orientados a promover una gestión más transparente de los recursos económicos en las administraciones municipales, particularmente en contextos de volatilidad macroeconómica.

El informe se organiza de la siguiente manera, en la siguiente sección se presentan aspectos claves -conceptuales y normativos- vinculados con la transparencia y el gobierno abierto, especialmente en materia presupuestaria y compras públicas. En la segunda sección se explica la metodología utilizada para realizar las mediciones en los gobiernos locales de Argentina. En la tercera sección, se presentan los resultados de la evolución para el periodo 2019-2023. Posteriormente, se presentan una serie de herramientas tecnológicas aplicadas en materia de transparencia presupuestaria y de compras/licitaciones públicas. Por último, se introducen algunas conclusiones y reflexiones finales.

2.- Marco Teórico

El avance en materia de transparencia ha sido producto de un proceso histórico en que las demandas ciudadanas por una mayor transparencia y rendición de cuentas se enfrentaron a una cultura estatal de opacidad y secretismo (Ciucci et al, 2019). No obstante, la revolución digital ha transformado los incentivos y costos de la transparencia. Esto ha contribuido a una mayor presión a los gobiernos para publicar de oficio datos que son de relevancia. De esta manera, en los últimos años, surgieron las leyes de transparencia activa por medio de las cuales se obliga a las instituciones oficiales a publicar determinados datos e información (Noveck, 2017 en Cucci et al., 2019). La transparencia activa ha vuelto operativo el deber del Estado de proveer información mientras que la transparencia pasiva volvió operativo el derecho de acceso a la información del ciudadano (Noveck, 2017 en Ciucci et al, 2019).

En las bases de la apertura de datos gubernamentales, existen dos enfoques, por un lado, como derecho ciudadano, y por otro, como herramienta de mejora de la dinámica social (Ubaldi, 2013). Según el primer enfoque, el acceso a la información pública se justifica en que los funcionarios son mandatarios que trabajan en representación de los intereses de la ciudadanía. En este sentido, la apertura de la información es un mecanismo idóneo para una rendición de cuentas eficaz y continua. El segundo enfoque, en cambio, enfatiza las ventajas que tiene para los ciudadanos el poder acceder a los datos del gobierno respecto a los servicios que ofrece el mismo (Ciucci et al, 2019). Ambos enfoques se complementan. Mientras el primer enfoque sentó las bases para la sanción de las leyes regulatorias de la transparencia pasiva, el segundo dió fundamento a las leyes de transparencia activa (Ciucci et al, 2019).

La transparencia activa es definida como la obligación de la administración pública de publicar y mantener actualizados ciertos ítems, datos o documentos que



contienen información pública relevante. Es decir, aquellos elementos o datos importantes que va generando la administración deberían ser visibles, localizables, accesibles y expresados con claridad. Al comienzo, el formato utilizado para publicarlos fueron archivos documentales y repositorios; pero actualmente la tendencia es suministrarlos vía on-line, en la web, y también generar espacios colaborativos de creación e intercambio ciudadano (Ciucci et al, 2019). En este aspecto, Darbshire avanza introduciendo el concepto de Transparencia Proactiva, refiriendo a "la necesidad de proveer de información al público necesaria para acceder a los servicios gubernamentales, que se han expandido ampliamente con el auge del gobierno electrónico" (Ciucci et al, 2019:64). Tal como señalan Concha y Naser, el gobierno electrónico antecede al gobierno abierto, al momento que comenzó a utilizarse la Web como un canal paralelo para el acceso a los servicios por parte de la ciudadanía (Ochoa Chaves et al, 2020:21).

Dentro de la transparencia gubernamental, la presupuestaria reviste una importancia particular, especialmente, si se considera que el presupuesto es el principal instrumento de política pública del gobierno. En éste se establecen, en términos monetarios, las prioridades del gobierno y se identifican los beneficiarios y perjudicados de las políticas (Fundar, 2012). Es fundamental que los ciudadanos tengan acceso a información clara y detallada sobre cómo se asignan y gastan los recursos públicos. De este modo, la transparencia presupuestaria contribuye a la rendición de cuentas, la participación ciudadana y la confianza en las instituciones gubernamentales. En este sentido, es una condición necesaria para la consolidación de cualquier Estado democrático (Fundar, 2012). La falta de conocimiento preciso por parte de la ciudadanía acerca de las políticas públicas y su implementación, especialmente en lo que respecta al gasto público, limita su capacidad para tomar decisiones informadas al ejercer sus derechos ciudadanos. Es crucial entonces que cuenten con información detallada y comprensible para evaluar el impacto del gasto y el desempeño de las políticas gubernamentales, así como identificar a los responsables de la gestión de los recursos (Fundar, 2012).

Por su parte, la adquisición de bienes, servicios y obras por parte de los gobiernos y empresas estatales, constituye una importante actividad económica gubernamental. Los gobiernos destinan grandes sumas de dinero de los contribuyentes a las compras públicas para llevar a cabo sus funciones y cumplir sus responsabilidades. De acuerdo a la Organización Mundial de Comercio (OMC) la contratación pública representa en promedio el 10-15% del PIB de una economía. Las compras públicas, en promedio, representaron el 32,5% del gasto del gobierno central en los países de la OCDE (14% del PIB) y el 29,8% en los países de América Latina y el Caribe (8,6% del PIB)¹. Mientras que el gasto subnacional representa alrededor del 19% del gasto general consolidado, el gasto subnacional en adquisiciones representa alrededor del 27% del gasto general de las adquisiciones y el 32% de la infraestructura². Esto es particularmente importante en países con un sistema federal como Argentina donde el gasto subnacional es aproximadamente del 45% en promedio³.

¹ "Mejor gasto para mejores vidas: cómo América Latina y el Caribe puede hacer más con menos", 2018, Banco Interamericano de Desarrollo.

² Ídem

³ Ídem



Como destaca la OECD, "las grandes sumas de dinero y la estrecha interacción entre los sectores público y privado, hacen que [la compra pública] sea una de las actividades gubernamentales más propensas a riesgos de derroche, mal uso y corrupción"⁴. En América Latina y el Caribe, el nivel de gobierno local representó el 38,2% del total de las contrataciones públicas, seguido por el 37,1% a nivel central y el 24,8% a nivel estatal⁵. En el caso de Argentina, las compras públicas representan a nivel país más del 5% del Producto Bruto Interno (PBI)⁶. Por esto, es fundamental hacer más abiertos y transparentes los sistemas de contratación con vista a lograr resultados concretos en la entrega de bienes públicos y construir instituciones eficaces. Por ello, los organismos internacionales enfatizan en la necesidad de propugnar por la publicidad de los procesos de contratación⁷. En este sentido, uno de los principios básicos en la contratación o compra pública es el de la publicidad. Esto implica que tanto todos los oferentes como la sociedad en general puedan conocer la información relacionada al proceso de contratación pública "desde la formulación de las bases o pliego de condiciones hasta la adjudicación" (Lucero, 1993:13).

⁴ "Panorama de las Administraciones Públicas: América Latina y el Caribe 2020", OECD

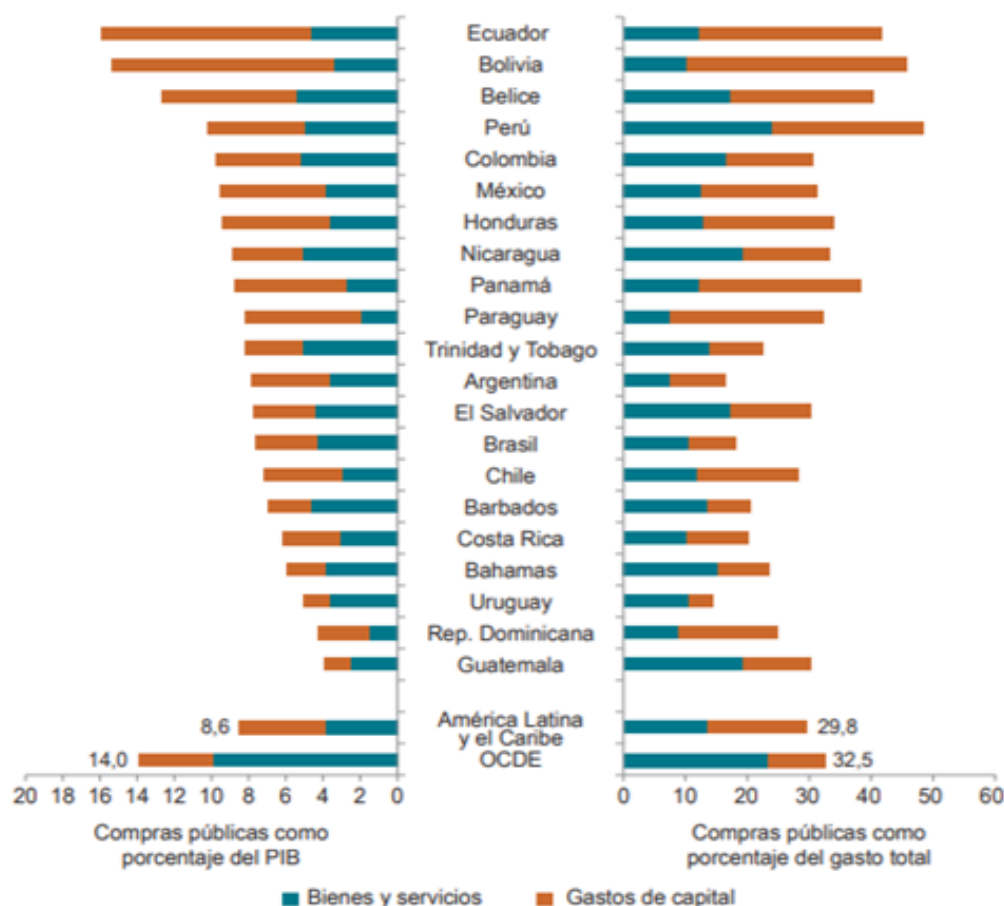
⁵ Panorama de las Administraciones Públicas: América Latina y el Caribe 2020", OECD

⁶ "El Gobierno impulsa la participación de la industria nacional en las compras públicas de indumentaria y calzado para Seguridad y Defensa", Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación (2019)

⁷ Banco Mundial. 2019. Índice de Acceso a la Información Pública en las Provincias Argentinas: un análisis de la calidad normativa.



Gráfico 1: Gasto en compras públicas como porcentaje del PIB y del gasto público, 2016



Fuente: Cálculos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a partir de las Cuentas Nacionales de la OCDE, la base de datos sobre gastos de FMM, WEO del FMI (2015-2016) y Pessino, Badin et al. (2018).

Nota: Los datos sobre el gasto siguen los conceptos del Manual de Estadísticas de Finanzas Públicas (MEFP), FMI. 'Compras' se define como la suma del uso de bienes y servicios y el gasto de capital total (transferencias de capital más inversiones). 'Bienes y servicios' se refiere al uso de bienes y servicios en el GFSM (Government Finance Statistics Manual). 'Gasto de capital' incluye las transferencias de capital más inversiones. En el caso de Belice, Barbados, Bahamas y Trinidad y Tobago, se refiere al gasto del gobierno central. México y Chile no están incluidos en el promedio de la OCDE.

Respecto a los factores que inciden en la implementación de las prácticas de gobierno abierto, existen distintos estudios que hacen mención al tamaño de los municipios. Respecto a esto, Norris y Moon (2005) encontraron, en el caso de los municipios norteamericanos, que el tamaño medido por la cantidad de habitantes está estrechamente relacionado con la publicación de datos y la implementación de los servicios en línea. Por su parte, Serrano Cinca (2009), Wilkinson y Cappel (2005) indican que cuanto más grande es el municipio, más probable que el mismo adopte mayores prácticas de transparencia y gobierno electrónico comparado a los municipios pequeños. De acuerdo a varios autores, el tamaño de la ciudad importa para promover la transparencia (Albalade del Sol, 2013; Bearfield y Bowman, 2017) pues "en las ciudades grandes la competencia política estimula la transparencia, mientras que en las ciudades pequeñas la escasez de recursos gubernamentales y



el menor nivel de profesionalismo administrativo redunda en una menor transparencia" (Ciucci et al, 2019:65).

En cuanto a la medición del nivel de transparencia a nivel municipal, en Latinoamérica, Brasil como uno de los miembros fundadores en América Latina de la Alianza por el Gobierno Abierto (AGA), se destaca por sus avances en la materia. Con el objetivo de medir la calidad de la transparencia de los gobiernos y en base a exigencias normativas (Leyes N° 101/2000, N° 131/2029 y N° 12.527/2011), en este país se han creado distintos indicadores para comprobar si se cumplen o no las obligaciones. Uno de estos indicadores es la Escala Brasil Transparente (EBT), creado en 2015, cuya metodología mide la transparencia pública de estados y municipios sobre la base de las previsiones de la Ley de Acceso a la Información. Esta metodología fue desarrollada en 2014 para evaluar la transparencia de la gestión pública municipal de las ciudades sede de la Copa Mundial de Fútbol del mismo año. Otro indicador es el Índice de Ciudad Transparencia que desde el 2010 evalúa los portales de transparencia de los municipios con más de 200 mil electores (Miola et al., 2018). Además, existe el Índice de Transparencia Ejecutiva Municipal y Gobernabilidad Pública, desarrollado por Transparencia Internacional para evaluar la transparencia de los poderes subnacionales brasileños. Transparencia Internacional proporcionó esta metodología específica a organizaciones de la sociedad civil que llevan a cabo la evaluación de más de 180 municipios en siete estados brasileños (transparenciainternacional.org.br/itgp/municipal).

Uruguay, por su parte, cuenta con el Índice de Transparencia Activa en Línea (ITAEL) que desde 2013 mide el nivel de transparencia del gobierno en sus distintos niveles en cumplimiento con la normativa vigente (Ponce, 2017). En tanto, Colombia posee el Índice de Transparencia de las Entidades Públicas Municipales (ITEP-M) el cual mide las condiciones institucionales de los municipios que pueden favorecer hechos de corrupción en la gestión administrativa, para prevenir que los mismos no ocurran⁸. En México destaca el Índice de Transparencia Municipal Básico (ITMb) que busca mostrar el grado cuantitativo de transparencia con que los gobiernos municipales desarrollan su gestión (Herrera Torres, 2012).

A nivel regional, en los últimos años, hubo experiencias de gobierno abierto en los dieciséis países adscritos a la Alianza por el Gobierno Abierto (AGA). Estos países han presentado planes de acción enfocados hacia la implementación de acciones concretas alineadas a los ejes estratégicos previstos por la AGA. Chile, desde 2008 cuenta con la Ley 20.285 sobre acceso a la información pública, y la ley 20.500 sobre asociaciones y participación ciudadana. Bajo este marco, Chile creó el Consejo para la Transparencia (CPLT) que establece un mecanismo constante de control y seguimiento de las administraciones públicas. Desde el año 2012, este Consejo mide el nivel de cumplimiento de las municipalidades en términos de publicidad y promoción de la información pública a través del Índice de Transparencia Activa Municipal (ITAM). Para el año 2020, los índices de cumplimiento de las normas sobre transparencia activa del sector municipal, en forma agregada, alcanzó una media de

⁸ Corporación Transparencia por Colombia. 2017. Índice de Transparencia Municipal. Resultados 2015-abril 2016. Colección de Documentos Observatorio de Integridad N° 17. Bogotá, Colombia.



76,4 puntos sobre 100⁹. Desde una vista por materias o ítems, en lo referente al presupuesto y ejecución, el sector municipal obtuvo en forma agregada un 77% de cumplimiento; y el nivel de cumplimiento en compras y contrataciones variaron según fueran efectuadas a través del Sistema de Compras Públicas (96,8% de cumplimiento) o fuera de este sistema (68,5% de cumplimiento)¹⁰. Desde una perspectiva regional, la Región Metropolitana lideró el nivel de cumplimiento promedio y ocho regiones de las dieciséis (total) superaron la media nacional.¹¹

En el caso de Ecuador, en 2004, aprobó la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP) que tenía como objeto de aplicación a las instituciones que son parte del Estado ecuatoriano y también a las instituciones cofinanciadas. La LOTAIP hacía hincapié en los documentos que se deben publicar en el portal web de los municipios (Art. 7, Título II), especificando que la información debe ser publicada organizándola por temas, ítems, orden secuencial o cronológico, etc. para que la ciudadanía pueda ser informada correctamente y sin confusión. Entre la información que la ley establecía que debía ser difundida de manera obligatoria se encontraban: el texto íntegro de todos los contratos colectivos vigentes en la institución (así como sus anexos y reformas); información total sobre el presupuesto anual así como su liquidación (especificando destinatarios de la entrega de recursos públicos); información completa y detallada de todos los procesos precontractuales, contractuales, de adjudicación y liquidación, de las contrataciones de obras, adquisición de bienes, prestación de servicios, arrendamientos mercantiles, etc.; y listado de las empresas y personas que han incumplido contratos, entre otros (Art. 7, incisos e, g, h, i, j).

En 2016, aplicando la metodología Infoparticipa, se realizó una evaluación sobre la transparencia de las webs de los municipios de Ecuador mayores de 25.000 habitantes. Este trabajo concluía que la información suministrada por los municipios ecuatorianos en sus páginas webs era claramente insuficiente en todos los casos y en todos los ámbitos de información, a pesar de la existencia de una ley de transparencia (Molina Rodríguez-Navas et al. 2018). Según este estudio, los municipios ecuatorianos no publicaban todas las informaciones, ni se aplicaban principios fundamentales como la necesidad de que la información sea fácilmente comprensible y accesible, por lo que resultaba inútil para promover la participación política ciudadana (Molina Rodríguez-Navas et al. 2018).

En 2018, Ecuador se adhirió a la Alianza para el Gobierno Abierto. En 2019, Medranda-Morales et al (2021) evaluaron las páginas webs de 124 municipios de Ecuador de más de 20.000 habitantes utilizando la metodología Infoparticipa. Los resultados revelaron que en Ecuador el nivel de transparencia es muy bajo, aunque había mejorado respecto de los resultados ofrecidos por estudios anteriores (Medranda-Morales et al. 2021). En los municipios de más de 20.000 y menos de 50.000 habitantes, el 95% no alcanzaba el 50% de indicadores positivos (Medranda-Morales et al. 2021). De los municipios de más de 50.000 y menos de 100.000 habitantes, el 72% no alcanzaron el 50% de indicadores positivos (Medranda-Morales et al. 2021).

⁹ Consejo para la Transparencia. 2021. Índice de transparencia activa y derecho de acceso a la información. Santiago, Chile

¹⁰ Ídem.

¹¹ Ídem.



En los municipios de más de 100.000 habitantes, el 63% no alcanzó el 50% de indicadores positivos (Medranda-Morales et al. 2021). Por otro lado, este estudio indicaba que el número de habitantes es un factor que determina el porcentaje de cumplimiento de los indicadores en las webs, por tanto, los recursos de los municipios dedicados a esta cuestión era un factor determinante (Medranda-Morales et al. 2021).

En 2023, Ecuador emitió una nueva Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP) que representa en varios aspectos un importante avance. La ley exige que la información que generan o custodian los sujetos obligados la difundan en formato de datos abiertos, a fin de que sea de fácil comprensión, accesible, usable y reusable para todas las personas y de esta manera satisfacer las necesidades ciudadanas, y promover una cultura de transparencia.

En 2023, De la Torre y Núñez publicaron un estudio analizando a los municipios ecuatorianos utilizando un Índice de Transparencia Activa (ITA) basado en el Art. 7 de la LOTAIP, y revelaron que un alto porcentaje de municipalidades contaban con información desactualizada o no cumplían con la norma establecida (De la Torre y Núñez, 2023). De los 221 gobiernos locales de Ecuador, un 31,22% cumplía con el registro y publicación de la información correspondiente (De la Torre y Núñez, 2023). Un 34,84% no cumplía en lo absoluto, mientras que el 33,94% de los gobiernos autónomos descentralizados municipales presentaba información desactualizada (De la Torre y Núñez, 2023).

3.- Transparencia en Argentina

El Acceso a la Información Pública fue declarado Derecho Humano por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2007. En Argentina la aprobación de la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública fue recién en 2017, siendo uno de los últimos países de la región en aprobar este tipo de ley.

El 2º artículo de la Ley de Acceso a la Información Pública en Argentina establece que "el derecho de acceso a la información pública comprende la posibilidad de buscar, acceder, solicitar, recibir, copiar, analizar, reprocesar, reutilizar y redistribuir libremente la información" y se lo reconoce como un derecho fundamental independientemente de la existencia de un derecho subjetivo o interés legítimo, es decir, toda persona humana puede solicitar información a los entes estatales (art. 3º). Con respecto al ámbito de aplicación de esta ley, el mismo se restringe a los tres poderes nacionales (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y a los entes descentralizados de la Nación. No es directamente aplicable a los gobiernos subnacionales (provincias y municipalidades). Las provincias pueden adherir a la ley incorporando de esta manera su contenido a la normativa provincial. Las leyes provinciales al respecto son distintas entre sí, lo que imposibilita garantizar una forma homogénea del derecho a informarse de todos los ciudadanos argentinos, y las leyes sancionadas más recientemente tienen una calidad normativa más elevada que las más antiguas¹².

La ley nacional recoge la transparencia activa como una obligación de los funcionarios públicos. Primero, establece que los organismos públicos "deberán facilitar la búsqueda y el acceso a la información pública a través de su página oficial

¹² BANCO MUNDIAL. 2019. Índice de Acceso a la Información Pública en las Provincias Argentinas: un análisis de la calidad normativa.



de la red informática, de una manera clara, estructurada y entendible para los interesados y procurando remover toda barrera que obstaculice o dificulte su reutilización por parte de terceros" (art. 32°). Además especifica una serie de datos que deben hallarse en los portales web de las instituciones obligadas entre las cuales se encuentran: la nómina de autoridades y personal de la planta permanente y transitoria u otra modalidad de contratación; las escalas salariales correspondientes a todas las categorías de empleados, funcionarios, consultores, pasantes y contratados; el presupuesto asignado a cada área, programa o función, las modificaciones durante el ejercicio anual y el estado de ejecución actualizado en forma trimestral hasta el último nivel de desagregación en que se procese; y el listado de las contrataciones públicas, licitaciones, concursos, obras públicas y adquisiciones de bienes y servicios.

Por otra parte, en 2005 entró en vigencia el Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal conforme se dispuso en la Ley N° 25.917, sancionada en 2004. Se trata de una ley de adhesión lo cual implica que sus disposiciones entran en vigencia en los respectivos estados provinciales y municipales sólo cuando se formaliza el acto voluntario por parte de la jurisdicción. Este régimen tiene como mandato, en su ley de creación, un capítulo completo destinado a la transparencia en la gestión pública en relación a la difusión de información presupuestaria. Al respecto, la ley determina la publicidad, en la página web, del presupuesto anual (una vez aprobado, o el prorrogado hasta que esto suceda), las proyecciones del presupuesto plurianual y la Cuenta Anual de Inversión. Asimismo, con un rezago de un trimestre se debe poner a disposición de los ciudadanos información trimestral de la ejecución presupuestaria, del gasto, del stock de la deuda pública y del pago de servicios de deuda.

El artículo 33 de la ley establece que los gobiernos provinciales inviten a adherir a la misma a sus municipios. Propone que se apliquen los principios de la ley a los municipios, promoviendo que éstos elaboren su información fiscal con los criterios fijados en la ley, coordinen su difusión con los estados provinciales e informen todo lo relativo al Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal. Para esto, los municipios cuentan con la asistencia técnica y soporte del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal.

La adhesión de las provincias, en la mayoría de los casos, se dio en forma temprana, al momento de la creación del régimen. En el primer año de vigencia del régimen, se incorporaron 19 de las 21 provincias que actualmente se encuentran adheridas (Farah, 2017). En 2017, se introdujeron modificaciones por medio de la Ley N° 27.428, ampliándose el carácter del régimen a Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno. La incorporación de los municipios a este nuevo régimen se ha producido bajo distintas modalidades. En la mayoría de los casos, la ley de adhesión provincial invita a sus municipios a adherir al régimen (14 casos). En otros la ley de adhesión provincial tiene alcance directo en los municipios (2 casos). Y en otras provincias la ley de adhesión no hace mención alguna a los municipios (4 casos). Además del gobierno nacional, las jurisdicciones que integran el régimen son las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y Tucumán, y asimismo 514 municipios (Farah, 2017).



Respecto a la existencia de mediciones sobre la transparencia fiscal a nivel municipal, se puede mencionar el índice de "Visibilidad Fiscal en Municipios Argentinos (IVF)" publicado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) en el año 2017 (Argañaraz et al., 2017). Este índice se calculó sobre una muestra de cien municipios argentinos a partir de la exploración de la información de carácter fiscal publicada en los sitios webs gubernamentales oficiales (presupuesto, ejecución presupuestaria, legislación fiscal, deuda, licitaciones, boletín oficial y personal). Según el mismo, en promedio, los gobiernos locales difundieron sólo el 42% de la información considerada relevante para poder realizar un control ciudadano de la gestión pública (Argañaraz et al., 2017). Este índice se realizó consecutivamente desde 2011 a 2017, y en términos generales, en promedio, evidenció ligeras mejoras en los resultados, acumulando un crecimiento del 50% de cumplimiento respecto del valor del 2011 (Argañaraz et al., 2017).

Por su parte, en 2017, Ciucci et al. (2019), construyeron un índice de transparencia municipal que aplicaron sobre una muestra de veinticinco ciudades correspondientes a las ciudades capitales de provincia de Argentina más el municipio de Bahía Blanca y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Exploraron los sitios web municipales para valorar la presencia o no de determinados elementos de transparencia fundamentalmente activa. El relevamiento se realizó entre diciembre de 2017 y marzo de 2018, sobre veinte indicadores relativos a aspectos como presupuesto, remuneraciones, subsidios, contratos públicos, declaraciones juradas, acceso a la información, reuniones abiertas y controles institucionales. Entre las conclusiones de este proyecto se encuentra la existencia de una correlación estadísticamente significativa y positiva entre el tamaño del municipio y el indicador de transparencia, es decir, que municipios de mayor tamaño se corresponden con municipios con mayores niveles de transparencia (Ciucci et al., 2019). También se encontró que existe una relación entre los ingresos del municipio y los niveles de transparencia (Ciucci et al., 2019).

Además de que estos índices no lograron continuidad en el tiempo, la información que proveen se centra principalmente en lo presupuestario y, básicamente, en lo previsto normativamente. De este modo, abordan de manera limitada la transparencia fiscal, aludiendo simplemente al presupuesto y refiriendo a las licitaciones en sentido limitado (sólo consideran la publicidad de los llamados a licitaciones, costos de las mismas e identificación de los proveedores). Como se mencionó anteriormente, las compras públicas constituyen un aspecto relevante en la evaluación de la transparencia en torno al manejo de los recursos públicos. En este sentido, el índice en que se basa este trabajo, es más amplio respecto a la información relevada sobre compras públicas, y desde una perspectiva dinámica de los procesos licitatorios pues considera las modificaciones, prórrogas y anulaciones, entre otros aspectos. A continuación, se presenta la metodología utilizada para el índice que sustenta el presente análisis, para posteriormente analizar la información que éste suministra a los fines del actual trabajo.

4.- Metodología

La metodología aplicada en el presente trabajo está basada en la herramienta Mapa Infoparticipa del Laboratorio de Periodismo y Comunicación para la Ciudadanía Plural de la Universidad Autónoma de Barcelona (Robles-López, C., 2020). A partir de la misma, se realizó una selección y adaptación de los indicadores, tomando como



referencia los criterios aplicados al caso ecuatoriano (Rodríguez-Navas y Medrandá, 2018).

La metodología se enfoca en evaluar la disponibilidad y accesibilidad de información provista por los sitios web oficiales de los municipios, a partir de los cuales se revelan diferentes aspectos relativos a la transparencia. En este sentido, no se incluye información partidaria o de contexto, ni se intenta determinar causalidades o correlaciones al momento de analizar los datos.

La unidad básica de recogida y análisis de información es la ficha de cada municipio compuesta de 52 indicadores a relevar que responden a ocho ejes dependiendo del carácter de lo comunicado: 1) autoridades, 2) órganos de gobierno, 3) rendición de cuentas, 4) presupuesto, 5) contrataciones y licitaciones públicas, 6) comunicación institucional, 7) información general y 8) participación ciudadana. En este trabajo se analizan dos de estos ocho ejes: 4) presupuesto y 5) contrataciones y licitaciones públicas; al ser los dos ejes en que el desempeño del conjunto de los municipios relevados ha sido más bajo y con menor evolución positiva a lo largo del tiempo. Sobre el Eje Presupuesto, los indicadores asociados evalúan la disponibilidad de normas respectivas a la gestión de recursos como el presupuesto vigente y sus modificaciones, la ejecución mensual y liquidación presupuestaria correspondiente a ejercicios anteriores. Para Contrataciones/Licitaciones públicas se recoge información sobre todas las etapas del proceso, desde la publicación de los llamados a licitación vigentes, hasta las contrataciones efectivamente realizadas, modificaciones reglamentarias y valoración del proceso.

Al momento de evaluar, se amplió el abanico de posibilidades respecto al criterio metodológico original que presenta valoración positiva o negativa – valuando en 1 o 0 respectivamente. Por lo que, para cada uno de los indicadores considerados, el valor puede asumir tres valores posibles. En caso de contar con toda la información considerada en la definición del indicador y cumplir con las condiciones básicas de accesibilidad propuestas en la metodología original, el valor es 1. Para las situaciones en donde se disponga de información parcial pero que cumpla con requisitos mínimos, el valor es 0,5. Y para los casos donde no se disponga en absoluto, o mínimamente, de la información correspondiente al indicador, el valor es 0. Las condiciones de accesibilidad de la información que debe cumplimentar el diseño de cada sitio web en sus diferentes puntos para obtener la valoración positiva están dadas por dos criterios base: la información debe estar actualizada y debe ser fácilmente localizable, de manera que resulte accesible para la ciudadanía en su conjunto, no debiendo disponer de un conocimiento más allá del básico para poder disponer de los datos.

Durante los años 2019 a 2021 el análisis se realizó para un total de 70 gobiernos subnacionales, correspondientes a los tres municipios más importantes (en materia poblacional) de cada una de las 23 provincias del país más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este conjunto representa el 24% de la población nacional, según el último censo con información disponible (en ese entonces, el Censo Nacional de 2010). A partir de 2022 se agregaron 5 localidades: Ciudad de Mendoza (Mendoza), La Matanza (Buenos Aires), Lomas de Zamora (Buenos Aires), Quilmes (Buenos Aires), Ciudad de Rawson (Chubut) y Río Grande (Tierra del Fuego). De esta manera, se incluyeron todas las localidades capitales de las 23 provincias del país (aún si no son los municipios más poblados) y se amplió el número de localidades de la provincia



de Buenos Aires (de 3 a 6) dado su incidencia poblacional (esta provincia representa el 38% del total poblacional a nivel nacional). El propósito de esta incorporación fue tener un conocimiento más acabado de la situación local. Con la incorporación de estas localidades, el total de municipios del relevamiento representa el 46 % de la población argentina total.

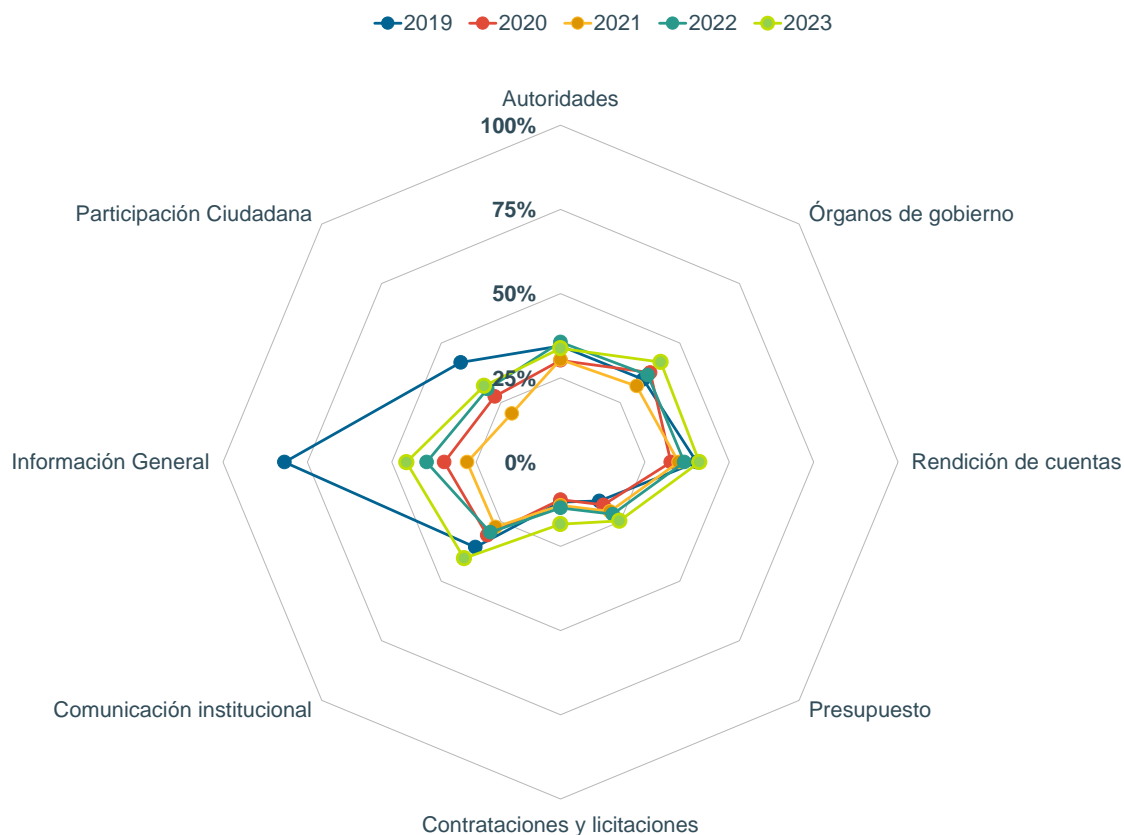
5.- Resultados

Se presentan a continuación los resultados obtenidos sobre los indicadores de los ejes de Presupuesto y Contrataciones/licitaciones para los municipios más importantes de la República Argentina para el periodo 2019-2023.

El enfoque de este trabajo en los ejes de Presupuesto y Contrataciones/Licitaciones, surge de la observación de la evolución de los niveles de cumplimiento de los municipios relevados en los distintos ejes a lo largo del periodo 2019-2023. De los ocho ejes, destaca el bajo porcentaje de cumplimiento y avance en el transcurso del tiempo por parte del conjunto de municipios en los ejes de Presupuesto y de Contrataciones/Licitaciones. Como se observa en el gráfico, estos dos ejes, son los de más bajo desempeño. En el eje de Presupuesto el total de municipios, en promedio, alcanzó su mejor desempeño en 2023 con un nivel de cumplimiento del 25%, y su peor desempeño fue en 2019 con un cumplimiento del 16%. En el eje de Contrataciones y licitaciones, en promedio, los municipios lograron su mejor desempeño en 2023 con un nivel de cumplimiento del 18%, y su peor desempeño en 2020 con un cumplimiento del 11%.



Gráfico 2: Evolución de los niveles de cumplimiento por eje



Fuente: Elaboración propia

A partir de estos datos, el objetivo del presente estudio es evaluar el desempeño al interior de estos dos ejes, analizando el nivel de cumplimiento de cada uno de los indicadores que componen los ejes de Presupuesto y de Contrataciones/Licitaciones.



Tabla 1: Resultados de evaluación de las webs de los municipios de Argentina. Porcentaje de cumplimiento de cada indicador del Eje Presupuesto. Años 2019-2023

N°	Indicador	% cumplimiento				
		2019	2020	2021	2022	2023
	Eje 4: Presupuesto	16%	18%	21%	22%	25%
21	¿Se publica el presupuesto del año en curso y/o vigente?	42%	42%	47%	47%	60%
22	¿Se publica información sobre la ejecución mensual del presupuesto del año en curso?	19%	17%	23%	20%	33%
23	¿Se publican las modificaciones presupuestarias realizadas?	5%	11%	12%	21%	27%
24	¿Se publica información sobre el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y/o nivel de endeudamiento?	6%	12%	15%	13%	20%
25	¿Se publica la liquidación de los presupuestos de ejercicios anteriores y/o la cuenta general?	24%	15%	16%	17%	23%
26	¿Se publica el personal y funcionarios, y sus remuneraciones?	2%	10%	11%	13%	17%

Fuente: Elaboración propia

Respecto al eje Presupuesto, el nivel de cumplimiento es bajo, encontrándose por debajo del 25% a lo largo de los relevamientos. Al analizar los indicadores al interior de este eje, destaca la publicación del presupuesto (Indicador N° 21) que obtiene respecto al resto el mayor nivel de cumplimiento, entre un 42 y 60%. En oposición, la publicación sobre personal y funcionarios y sus remuneraciones (Indicador N° 26), así como el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y/o nivel de endeudamiento (Indicador N° 24) son los indicadores que tiene menor nivel de cumplimiento, en torno al 20% en el último relevamiento (2023). Estos dos indicadores muestran cierta evolución desde 2019, en que los niveles de cumplimiento eran del 2% y 6% respectivamente. Por otra parte, el nivel de cumplimiento sobre la publicación de la ejecución mensual del presupuesto (Indicador N° 22), las modificaciones presupuestarias (Indicador N° 23) y los presupuestos anteriores (Indicador N° 25), ha sido en torno al 20% (con excepción de 2023 en que el Indicador 22 referente a la ejecución mensual superó el 30% de cumplimiento). El indicador sobre modificaciones presupuestarias (Indicador N° 23) muestra una evolución muy favorable pues pasó de un nivel de cumplimiento del 5% en 2019 al 27% en 2023. El indicador sobre la publicidad de presupuestos de ejercicios anteriores tuvo un nivel de cumplimiento del 24% en 2019, y a pesar de retrocesos en los años subsiguientes, en el último relevamiento de 2023 alcanzó el 23%.



El mejor desempeño de los municipios respecto los indicadores vinculados al presupuesto en comparación con el resto, podría encontrar su razón en la normativa mencionada anteriormente (régimen de responsabilidad fiscal). No obstante, el nivel de cumplimiento más alto se observa respecto a la publicación del presupuesto, que alcanza el 60%. Por lo tanto, hay necesidad de seguir trabajando, reforzando la normativa existente con otras políticas y acciones que aseguren su efectivo cumplimiento. Por otro lado, la poca publicidad de información respecto a cantidad de personal y funcionarios y sus remuneraciones, así como de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera; resultan preocupantes dado que como se mencionó el gasto subnacional representa un gran porcentaje del gasto público total y el nivel de endeudamiento subnacional tiene implicaciones significativas para la estabilidad macroeconómica y el crecimiento económico, entre otros aspectos.

Tabla 2: Resultados de evaluación de las webs de los municipios de Argentina. Porcentaje de cumplimiento de cada indicador del Eje Contrataciones y licitaciones. Años 2019-2023

N°	Indicador	% cumplimiento				
		2019	2020	2021	2022	2023
	Eje 5: Contrataciones y licitaciones	12%	11%	13%	14%	18%
28	¿Se publica la oferta de trabajo, el desarrollo de los concursos públicos y los resultados?	14%	8%	9%	11%	21%
29	¿Se publica el inventario general del patrimonio de la Institución?	1%	0%	2%	6%	11%
30	¿Se publican los contratos formalizados, mayores y menores?	18%	7%	8%	1%	30%
31	¿Se publican las licitaciones en curso?	47%	45%	53%	53%	61%
32	¿Se publican las actas de contratación?	4%	0%	1%	4%	13%
33	¿Se publican las modificaciones de los contratos formalizados y sus prórrogas, las licitaciones anuladas y las resoluciones anticipadas?	5%	2%	1%	2%	14%
34	¿Se publica la relación completa de proveedores, adjudicatarios y/o contratistas y la cuantía económica?	8%	2%	2%	7%	13%
35	¿Se publica el periodo medio de pago a los proveedores?	2%	0%	0%	1%	7%
36	¿Se publican las subvenciones otorgadas, las respectivas convocatorias y resoluciones?	6%	21%	18%	17%	28%
37	¿Se publican los convenios firmados, especificando las partes, su objeto y las obligaciones económicas que se deriven, en su caso?	14%	26%	34%	33%	52%

Fuente: Elaboración propia



El eje Contrataciones y Licitaciones tiene un menor nivel de cumplimiento comparado con el de Presupuesto, alrededor del 15%. Entre 2019 y 2022, el eje de Contrataciones y Licitaciones, tuvo poca evolución, pasó de 12% a 14%, pero alcanzó el 18% en 2023. Dentro de este eje, el indicador con mayor nivel de cumplimiento es el referido a la publicidad de las licitaciones, con el 61% en 2023 (Indicador N° 31). Por el contrario, varios indicadores tienen muy bajo nivel de cumplimiento. Entre estos se encuentran los relacionados con la publicidad del inventario del patrimonio (Indicador N° 29), los contratos formalizados (Indicador N° 30), las actas de contratación (Indicador N° 32), las modificaciones de los contratos (Indicador N° 33), la relación completa de proveedores, adjudicatarios y/o contratistas y la cuantía económica (Indicador N° 34), y el periodo medio de pago a los proveedores (Indicador N° 35). No obstante, en el último relevamiento de 2023, se observaron mejoras considerables en estos indicadores. La publicación de contratos (Indicador N°30) alcanzó el 30% de nivel de cumplimiento, cuando anteriormente no había superado el 20%. Con un nivel de cumplimiento levemente superior en torno al 10%, están la publicación de los concursos públicos (Indicador N° 28) y de las subvenciones otorgadas (Indicador N°36); indicadores que en 2023 superaron el 20% de cumplimiento. Por último, el indicador referente a la publicidad de los convenios firmados (Indicador N° 37) muestra una muy buena evolución habiendo pasado del 14% de cumplimiento en 2019 al 52% en 2023.

El bajo desempeño del conjunto de los municipios relevados respecto a los indicadores del eje de compras/contrataciones revela una importante debilidad de los estados subnacionales en materia de transparencia que requiere urgente intervención. La escasa evolución en el nivel de cumplimiento de varios de los indicadores de este eje, no condice con la importante evolución que han tenido las tecnologías de la información las cuales aportan varias herramientas para una mejor gestión y transparencia de los procesos de compra/contratación pública. En este sentido, las razones de esta contradicción podrían encontrarse en los altos costos que pueden resultar para los municipios relevados la implementación de nuevas tecnologías para modernizar sus procesos de compra/contratación pública.

De este modo, resulta importante agregar al análisis el tamaño de los municipios relevados. Anteriormente, se hizo referencia a una serie de investigaciones que encontraban cierta correlación entre el tamaño del municipio (medido en términos de su población) con el nivel de transparencia.

Tabla 3: Distribución del total de municipios según población. Año 2023

Población	Cantidad de Municipios	% de Total
Menos de 50.000 hab.	14	19%
Entre 50.000 y 200.000 hab.	38	51%
Entre 200.000 y 350.000 hab.	9	12%
Entre 350.000 y 500.000 hab.	3	4%
Más de 500.000 hab.	11	15%

Fuente: Elaboración propia

Tomando como referencia el último relevamiento realizado en el año 2023, se categoriza a los municipios relevados en cinco niveles de acuerdo a su población.



Del total de municipios relevados, el 51% corresponde a aquellos con una población entre 50.000 y 200.000 habitantes.

Tabla 4: Resultados de evaluación de las webs de los municipios de Argentina. Porcentaje de cumplimiento de cada indicador del Eje Presupuesto. Años 2019-2023

N°	Indicador	% cumplimiento				
		Menos de 50.000 hab.	Entre 50.000 y 200.000 hab.	Entre 200.000 y 350.000 hab.	Entre 350.000 y 500.000 hab.	Más de 500.000 hab.
21	¿Se publica el presupuesto del año en curso y/o vigente?	14%	61%	56%	67%	82%
22	¿Se publica información sobre la ejecución mensual del presupuesto del año en curso?	0%	25%	33%	67%	55%
23	¿Se publican las modificaciones presupuestarias realizadas?	7%	29%	22%	0%	18%
24	¿Se publica información sobre el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y/o nivel de endeudamiento?	0%	18%	0%	0%	36%
25	¿Se publica la liquidación de los presupuestos de ejercicios anteriores y/o la cuenta general?	0%	25%	11%	0%	27%
26	¿Se publica el personal y funcionarios, y sus remuneraciones?	0%	8%	11%	17%	41%

Fuente: Elaboración propia

Al examinar el nivel de cumplimiento de los indicadores del Eje Presupuesto según el tamaño de los municipios para el año 2023 se observa que, en general, los municipios más grandes alcanzan mayor nivel de cumplimiento. La relación de a mayor tamaño, mayor nivel de cumplimiento se observa claramente en los indicadores correspondientes a la publicación del presupuesto (Indicador N° 21), ejecución del presupuesto (Indicador N°22), y cantidad de personal, funcionarios y sus remuneraciones (Indicador N°26). No obstante, existen excepciones. En el Indicador 23 que refiere a la publicidad de las modificaciones presupuestarias, se observa que el conjunto de municipios entre 50.000 y 200.000 habitantes, alcanza un 29% de cumplimiento; mientras que los municipios con más de 500.000 habitantes, logran un 18% de cumplimiento. En el caso de la publicidad sobre el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad de deuda y/o nivel de endeudamiento (Indicador 24), se observa que el nivel de cumplimiento es nulo en los municipios con menos de 50.000 habitantes y entre 200.000 y 500.000 habitantes; mientras que los municipios entre 50.000 y 200.000



habitantes alcanzan un nivel de cumplimiento del 18% y los de más de 500.000 habitantes un 36% de cumplimiento. Para el Indicador N° 25 sobre la publicidad de la liquidación de los presupuestos de ejercicios anteriores y/o la cuenta general, el nivel de cumplimiento es nulo para los municipios más pequeños (menos de 50.000 habitantes), y aquellos entre 350.000 y 500.000 habitantes.

Tabla 5: Porcentaje de cumplimiento de cada indicador del Eje Contrataciones y licitaciones según tamaño de los municipios. Año 2023

N°	Indicador	% cumplimiento				
		Menos de 50.000 hab.	Entre 50.000 y 200.000 hab.	Entre 200.000 y 350.000 hab.	Entre 350.000 y 500.000 hab.	Más de 500.000 hab.
28	¿Se publica la oferta de trabajo, el desarrollo de los concursos públicos y los resultados?	0%	18%	11%	33%	18%
29	¿Se publica el inventario general del patrimonio de la Institución?	0%	4%	0%	0%	14%
30	¿Se publican los contratos formalizados, mayores y menores?	14%	21%	28%	33%	36%
31	¿Se publican las licitaciones en curso?	21%	61%	56%	67%	73%
32	¿Se publican las actas de contratación?	0%	8%	0%	0%	18%
33	¿Se publican las modificaciones de los contratos formalizados y sus prórrogas, las licitaciones anuladas y las resoluciones anticipadas?	0%	7%	11%	0%	18%
34	¿Se publica la relación completa de proveedores, adjudicatarios y/o contratistas y la cuantía económica?	0%	4%	0%	0%	32%
35	¿Se publica el periodo medio de pago a los proveedores?	0%	0%	0%	0%	0%
36	¿Se publican las subvenciones otorgadas, las respectivas convocatorias y resoluciones?	7%	25%	17%	33%	27%
37	¿Se publican los convenios firmados, especificando las partes, su objeto y las obligaciones económicas que se deriven, en su caso?	43%	47%	44%	67%	36%

Fuente: Elaboración propia

Respecto a los indicadores del Eje Contrataciones y licitaciones, se observa una variedad de situaciones. En el caso de los indicadores relativos a la publicidad de los contratos formalizados (Indicador N° 30) y la publicidad de las licitaciones en curso (Indicador N° 31), a mayor tamaño del municipio, mayor el nivel de cumplimiento. Los municipios más pequeños (menos de 50.000 habitantes) presentan un nivel de cumplimiento nulo en seis de los diez indicadores del Eje Contrataciones y licitaciones. El indicador en que los municipios más pequeños obtienen mayor nivel



de cumplimiento es el referido a la publicidad de los convenios firmados (43%) (Indicador N° 37), seguido por el Indicador 31 relativo a la publicación de las licitaciones (21%) y la publicación de los contratos formalizados (14%) (Indicador N° 30). Comparado con el resto, los municipios con una población entre 350.000 y 500.000 habitantes, obtienen mayor nivel de cumplimiento respecto a la publicación de ofertas de trabajo, y desarrollo de los concursos públicos (Indicador N° 28); la publicación de las subvenciones otorgadas (Indicador N° 36); y la publicación de los convenios (Indicador N° 37). En tres indicadores, con excepción del conjunto de municipios entre 50.000 y 200.000 habitantes, los municipios con menos de 500.000 habitantes muestran niveles nulos de cumplimiento (Indicadores N° 29, 32 y 34). El indicador relativo a la publicidad de las modificaciones de los contratos formalizados, sus prórrogas, las licitaciones anuladas y las resoluciones anticipadas (Indicador N° 33) si bien muestra una tendencia de mayor cumplimiento al crecer el tamaño del municipio, el grupo de municipios entre 350.000 y 500.000 habitantes tiene nulo cumplimiento. Por último, el nivel de cumplimiento respecto a la publicidad del periodo medio de pago a los proveedores (Indicador N° 35) es nulo, independientemente del tamaño del municipio.

Estos resultados condicen con los de investigaciones anteriores respecto a una relación positiva entre el tamaño de los municipios medido en términos de población y el nivel de transparencia. No obstante, también se observan altos niveles de cumplimiento en determinados indicadores para municipios pequeños. Esto podría encontrar explicación en que el cumplimiento de estos indicadores no reviste alta complejidad o esfuerzo ni alta exposición política. En este sentido, una posible línea de investigación a futuro podría ser calificar los indicadores según su nivel de complejidad o esfuerzo que requiere su cumplimiento, así como también el nivel de exposición política que revisten y cómo esto se relaciona con el nivel de cumplimiento de los mismos.

Por otra parte, a causa de la pandemia, muchos gobiernos locales aceleraron sus procesos de digitalización. En este proceso también cuentan con el apoyo y asesoramiento de organizaciones no estatales orientadas a este proceso. Ejemplo de esto es el programa de "Ciudades Digitales" de la Red de Innovación Local (RIL) orientado a acompañar a las ciudades a diseñar una estrategia de digitalización de los gobiernos locales, trabajando soluciones conjuntas. Esta organización también ofrece un portal que consiste en una plataforma que reúne casos, capacitación y herramientas para los gobiernos locales en distintas áreas. En próximas investigaciones podría incorporarse este aspecto en el análisis, cruzando los datos de las ciudades que participan en estas iniciativas con los resultados del relevamiento del índice de transparencia propuesto.

6.- Herramientas tecnológicas para la transparencia en materia de presupuesto y compras/licitaciones

La tecnología digital muestra un gran potencial para mejorar la transparencia presupuestaria en América Latina y el Caribe. La disponibilidad de herramientas avanzadas para la publicación e interacción en la web, ofrecen nuevas perspectivas para la difusión de información y la participación activa de los ciudadanos en asuntos públicos (Seco y Muñoz, 2018). Aunque el 73% de los países de América Latina y el Caribe cuentan con una estrategia de gobierno digital, la profundización de la



agenda digital sigue siendo una cuenta pendiente¹³. Además, la tecnología digital simplifica la publicación y comprensión uniforme de la información, y hace posible realizar comparaciones de manera ampliada a través del uso de estándares específicos de datos complementados por herramientas abiertas de preparación y publicación, como el Estándar de Datos de Contratación Abierta (OCDS, por sus siglas en inglés) y Estándar de Datos Presupuestarios Abiertos (OFDP, por sus siglas en inglés) (Seco y Muñoz, 2018).

A modo de ejemplo, big data/data analytics posibilita combinar y analizar datos de múltiples fuentes, y formatearlos en softwares de presentación de datos, ofreciendo panoramas generales y particulares de las finanzas públicas, simplificando el entendimiento del ciudadano sobre el uso de los recursos públicos (Seco y Muñoz, 2018). Al relacionar estas tecnologías con otras herramientas como lenguajes de búsqueda y cuadros de información personalizables, es factible crear perfiles de búsqueda y mejorar la experiencia de los usuarios. Canadá cuenta con el sistema TBS Infobase compuesto de una base de datos y herramientas de búsqueda on-line que suministra informaciones financieras y de recursos humanos del gobierno de Canadá combinando información contextual y datos de múltiples fuentes en un único repositorio, permitiendo una visión general del gobierno de Canadá y sus organizaciones, con acceso rápido, personalizable y fácil a informaciones detalladas del gasto público (Seco y Muñoz, 2018). En México también se ha creado una plataforma informática basada en estándares de datos abiertos, denominada Transparencia Presupuestaria, de reconocimiento internacional (Seco y Muñoz, 2018). Otra herramienta digital para la transparencia de la información presupuestaria son los llamados *Smart portals*, portales web que agregan informaciones de diversas fuentes y que posibilitan la personalización de servicios, contenidos y formas por parte de los usuarios y de los administradores (Seco y Muñoz, 2018).

Tabla 6: Ejemplos de uso de herramientas tecnológicas para la transparencia en materia de presupuesto y compras/licitaciones

Herramienta	Ejemplos
Big data/data analytics	<ul style="list-style-type: none"> TBS Infobase (Canadá) Transparencia Presupuestaria (México)
Aplicaciones móviles	<ul style="list-style-type: none"> PresupuestApp (Paraguay)
La Nube y blockchain	<ul style="list-style-type: none"> Infraestructura en la nube de Amazon para almacenar datos del proceso de compra bajo tecnología blockchain (México)

Fuente: Elaboración propia

Las tecnologías también mejoran la interacción entre los ciudadanos y las autoridades presupuestarias, y pueden contribuir a una mayor transparencia presupuestaria en el futuro. Paraguay, por ejemplo, introdujo una aplicación móvil llamada "PresupuestApp" en 2019 que permite a las personas realizar consultas sobre presupuestos y gastos aprobados de cualquier institución pública, obtener datos históricos sobre gastos por categoría y fuentes de financiamiento desde 2001, así como también reportar irregularidades presupuestarias al Ministerio de

¹³ OECD (2016), Panorama de las Administraciones Públicas: América Latina y el Caribe 2017".



Finanzas/Hacienda, y los datos también están disponibles en el portal nacional de datos abiertos¹⁴.

En el caso de las compras públicas, por ejemplo, México creó una infraestructura en la nube de Amazon para almacenar los datos del proceso de compra mexicano bajo una tecnología blockchain, con herramientas abiertas de libre acceso que posibilitan la visualización de los datos por toda la sociedad (Seco y Muñoz, 2018). Así, la tecnología blockchain puede sustentar los mecanismos de divulgación de informaciones fiscales pues el almacenamiento sistemático en esta tecnología a ser transparentadas permite que instituciones gubernamentales o civiles se acoplen al blockchain para buscar, procesar y publicar las informaciones allí disponibles, como es el caso del proyecto de Contrataciones Abiertas en México (Seco y Muñoz, 2018).

Como señalan Seco y Muñoz (2018), para muchos municipios resulta prácticamente imposible, debido a limitaciones de costos y recursos humanos, implementar un centro de datos de nivel adecuado. Por ello, suelen conformarse con "salas de servidores", enfrentando los problemas operativos y de seguridad inherentes a esta decisión. En este contexto, la adopción de la computación en la nube podría representar una solución particularmente beneficiosa para las administraciones fiscales subnacionales.

7.- Comentarios finales

El análisis sobre el índice de transparencia presentado, especialmente, en relación a los ejes de Presupuesto y Contrataciones/Licitaciones; deja en evidencia una serie de aspectos importantes a tener en cuenta, en vistas de considerar recomendaciones en la materia. Primero, es manifiesta la relevancia de contar con un mecanismo de medición de la transparencia a nivel municipal, para comprobar tanto la aplicación efectiva de la normativa vigente como evaluar la efectividad de las políticas o acciones llevadas a cabo para la rendición de cuentas sobre el manejo de los recursos públicos.

Por otra parte, la continuidad en el tiempo del indicador, permite obtener información sobre los cambios en el desempeño identificando avances y retrocesos, con distinto nivel de desagregación. Incluso que el período relevado incluya la pandemia de COVID-19, que en Argentina impactó puntualmente al año 2020, agrega otro elemento de análisis. En el caso del presupuesto, se observa un porcentaje levemente mayor de municipios que cumplieron los indicadores que componen este eje en los relevamientos posteriores a la emergencia sanitaria. Esto, en parte, pudo estar impulsado por la presión que ejerció la pandemia dado que, ante las restricciones, los municipios debieron desarrollar estrategias de digitalización tanto para prestar servicios como mantener sus compromisos de transparencia ante la ciudadanía. No obstante, como también lo muestran los datos, no sucedió lo mismo con el caso de los indicadores de Contrataciones/Licitaciones. La diferencia podría estar explicada porque en el caso del Presupuesto, existía ya cierto desarrollo previo en pro de la transparencia en esta materia producto de la existencia de normativa y algunas políticas de gobierno abierto orientadas en tal dirección, condición no presente en la misma medida en torno a las compras públicas. Por otra parte, es conocido que, en épocas de crisis como desastres

¹⁴ OECD (2020), Panorama de las Administraciones Públicas: América Latina y el Caribe 2020".



naturales o epidemias, el tema de compras y licitaciones suele ser un factor crítico pues como se ha demostrado en varios casos la urgencia se contrapone al cumplimiento estricto de los procedimientos (Rose-Ackerman, 2021). Pero en algunos indicadores de este eje se observa una mejora en el nivel de cumplimiento como la publicación de las ofertas de trabajo o concursos públicos, el inventario general del patrimonio, las licitaciones, la relación completa de proveedores y los convenios firmados. Esto demuestra que algunas jurisdicciones han empezado, aunque sea de manera muy incipiente, a realizar acciones en esta dirección.

Como se desprende del análisis, si bien en materia de presupuesto y contrataciones/licitaciones, no se observaron a nivel general retrocesos, tampoco hubo grandes avances (con excepción de algunas cuestiones), lo cual resulta un llamado de atención, por ser un área tan importante para el logro de una mayor responsabilidad y eficiencia en la gestión pública. Además, algunos especialistas argumentan que en situaciones de emergencia o etapas de recuperación post-crisis, se manifiestan riesgos altos de uso indebido de los recursos públicos (Khasiani et al., 2020). Cuando hay fraude y corrupción se pierde dinero indispensable para enfrentar la crisis de manera efectiva. Esto, a su vez, genera un círculo vicioso donde se ve afectada la gobernabilidad, especialmente por la merma de la confianza de la ciudadanía en las instituciones (Pertuzé Fariña, 2003:24).

Los resultados de la evaluación de las webs de las municipalidades más importantes del país han revelado que la información suministrada es claramente insuficiente en todos los casos y en todos los ámbitos de información. A pesar de la existencia de una ley de transparencia, ni se publican todas las informaciones, ni se aplican principios fundamentales (como la necesidad de que la información sea fácilmente comprensible y accesible) para promover la participación política de la ciudadanía. Para un estado democrático, la transparencia y la rendición de cuentas son instrumentos necesarios para elevar el nivel de confianza de la ciudadanía en el gobierno.

Tal como sugieren Seco y Muñoz (2018) la transparencia fiscal aún es un desafío en América Latina y el Caribe. Aunque varios países han progresado en la producción y publicación de reportes financieros, aún falta producir, publicar y divulgar datos económicos, fiscales y financieros de manera oportuna y con mayor cobertura para que la ciudadanía entienda cabalmente cómo se usan los recursos públicos y qué resultados se obtienen. Esta limitación cercena la evaluación de los efectos económicos y sociales producidos por las políticas implementadas, así como de la efectividad de los programas y la gestión fiscal y sectorial, con fines de retroalimentación de la política pública (Seco y Muñoz, 2018). De acuerdo al Índice de Presupuesto Abierto de 2017, sólo siete países de la región de América Latina y el Caribe, se situaban en el grupo con "disponibilidad substancial de informaciones" y la región, en promedio, alcanzó una puntuación promedio de 50, ubicándose apenas por encima del promedio mundial (42); en tanto que países más desarrollados y países comparables de Asia del Este y Asia Central alcanzan puntuaciones promedio de 73 y 55, respectivamente (Seco y Muñoz, 2018). A pesar de que muchos países de la región cuentan con una ley de transparencia, esto por sí solo no resulta suficiente para elevar los niveles de transparencia.

Por último, a partir de este trabajo, surgen otras líneas de investigación para desarrollar a futuro. Una es el análisis del nivel de transparencia de los municipios



clasificando los indicadores según el nivel de esfuerzo que requiere su implementación y/o el nivel de exposición política que supone su cumplimiento para las autoridades locales. Otros elementos no considerados en este trabajo que podrían añadirse al estudio son el acceso a servicios de internet por parte de la población y en relación con este, la presión ejercida por la población para que sus gobiernos municipales publiquen en sus sitios web información de su interés. Esto último podría medirse en cantidad de pedidos de información presentados por ciudadanos ante el municipio (transparencia pasiva). Asimismo, la existencia de iniciativas de organizaciones no estatales para apoyar a los municipios en el avance de su digitalización podría adicionarse también como factor de análisis a futuro.

A modo de cierre, el presente estudio muestra tanto la necesidad como la oportunidad existente en los gobiernos locales para mejorar su desempeño en materia de transparencia presupuestaria y compras públicas, aspectos claves en materia de eficiencia, rendición de cuentas y confianza para las administraciones públicas locales. Se evidencia también la importancia de la digitalización al momento de pensar en soluciones y avanzar fehacientemente en las áreas de presupuesto y compras públicas, de manera de favorecer una mayor integridad del sector público y, en consecuencia, mayor confianza de la ciudadanía, aspecto vital para las democracias modernas.

Bibliografía

- ALBALATE DEL SOL, D. 2013. "The institutional, economic and social determinants of local government transparency", *Journal of Economic Policy Reform*, VOL. 16, ISSUE 1:90-107.
- ARGAÑARAZ, N., DEVALLE, S., MALDONADO, F. y MANSO, J. 2017. "Visibilidad Fiscal en Municipios Argentinos: En promedio, se difunde poco menos de la mitad de información fiscal necesaria para el control de los gobiernos locales", Informe Económico N° 394, Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), Córdoba, Argentina.
- BEARFIELD, D. A., y BOWMAN, A. O. 2017. "Can You Find It on the Web? An Assessment of Municipal E-Government Transparency", *The American Review of Public Administration*, VOL. 47(2): 172-188.
- CIUCCI, F., DÍAZ, L., ALDERETE, M.V. y LINARES, S. 2019. "Construcción de un índice para medir la transparencia municipal: Buenos Aires, Bahía Blanca y las capitales de provincia de Argentina", *Revista Iberoamericana de Estudios Municipales*, núm. 20:54-84
- DE LA TORRE, S. y NÚÑEZ, S. 2023. "Transparencia en la administración pública municipal del Ecuador", *Estudios de la Gestión*, núm. 14:53-73.
- FARAH, P. 2017. *Responsabilidad fiscal 2017 para finanzas públicas sustentables*. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal.
- HERRERA TORRES, H.A; ARIAS TORRES, D.; COLÍN MARTÍNEZ, R. 2017. "Transparencia municipal: método de cálculo de indicador condensado. Propuesta para los gobiernos locales de Michoacán, México", *Revista Enfoques*, núm. 26:37-66.



- KHASIANI, K., KOSHIMA, Y., SINGH, A. 2020. "Controles de la ejecución presupuestaria para mitigar el riesgo de corrupción en el gasto por la pandemia". *Fiscal Affairs*. Serie especial sobre la COVID-19:1-11.
- LUCERO ESPINOZA, M. 1993. *La licitación pública*. México: Porrúa.
- FUNDAR. 2009. *Índice Latinoamericano de Transparencia Presupuestaria 2009*, México: Fundar.
- MIOLA, E.; JAMIL MARQUES, F.P.; ALMADA, M.P; DIAS FERREIRA AMORIM, P.K. 2018. "Avaliando Índices de Transparência". I Congreso DO INCT.DD (19 a 21 de Septiembre de 2018) Salvador- Bahía.
- MOLINA RODRIGUEZ-NAVAS, P. y MEDRANDA MORALES, N.J. 2018. "La transparencia de los municipios de Ecuador en sus sitios web: metodología y resultados", *América Latina Hoy*, VOL. 80:143-169.
- MEDRANDA-MORALES, N.J., MOLINA RODRÍGUEZ-NAVAS, P. y PALACIOS-MIELES, V.D. 2020. "Transparencia de la información pública en las páginas web de municipios de España y Ecuador", *Journal of Iberian and Latin American Research*, 26:3, 427-446.
- NORRIS, D.F. y M. J. MOON. 2005. "Advancing E-government at the Grass Roots: Tortoise or Hare?", *Public administration Review*, VOL. 65:64-75
- OCHOA CHAVES, L.E., GARCÍA GARCÍA, F. y MONGE ESPINOZA, P. 2020. "TICs, comunicación y participación ciudadana en los planes de gobierno abierto de Argentina, Costa Rica y México", *Global Media Journal*, VOL. 17, núm. 32:19-39.
- PERTUZÉ FARIÑA, C. 2003. "Nuevos tiempos para la gestión pública: potenciando la transparencia" *Revista Enfoques: Ciencia Política y Administración Pública*, núm. 1:19-27
- PONCE, M. 2017. "Tan cerca y tan lejos: la transparencia en los gobiernos departamentales en Uruguay 2013-2016", *Revista Uruguaya de Ciencia Política*, VOL. 26: 75-102
- ROBLES-LÓPEZ, C. y ZAMORA-MEDINA, R. 2020. "Transparencia online como bien intangible del sector público", *TransInformação*, VOL. 32:1-14
- RODRIGUEZ-NAVAS, P. y MEDRANDA, N. 2018. "La transparencia de los municipios de Ecuador en sus sitios web: metodología y resultados", *América Latina Hoy*, VOL. 80:143-169
- ROSE-ACKERMAN. 2021. "Corrupción y COVID-19", *Revista en Cultura de la Legalidad*, VOL. 20:37-60.
- SECO, A. y MUÑOZ, A. 2018. "Panorama del uso de las tecnologías y soluciones digitales innovadoras en la política y la gestión fiscal", Sector de Instituciones para el Desarrollo, División de Gestión Fiscal del Banco Interamericano de Desarrollo.
- SERRANO-CINCA, C., RUEDA-TOMÁS, M. y PORTILLO-TARRAGONA, P. 2009. "Determinants of e-government extension", *Online Information Review*, VOL. 33:476-498.



UBALDI, B. 2013. *Open Government Data: Towards Empirical Analysis of Open Government Data Initiatives*, Paris: OECD Publishing.

WILKINSON, V.O. y CAPPEL, J.J. 2005. "Impact of economic prosperity and population on e-government involvement", *Issues in Information Systems*, núm. 2: 204-209.



Anexos

ANEXO I

Detalle de indicadores considerados – por categoría

Autoridades

1. Información básica sobre el intendente. Nombre, foto, partido
2. Información básica sobre el intendente. Biografía, CV
3. Información básica sobre representantes que forman parte del gobierno municipal: Nombre, foto, partido.
4. Información básica sobre representantes que forman parte del gobierno municipal: Biografía, CV.
5. Información sobre representantes que no forman parte del gobierno municipal: Nombre, foto, partido.
6. Información sobre representantes que no forman parte del gobierno municipal: Biografía, CV.
7. Se publican las remuneraciones de los representantes políticos.
8. Se publican declaraciones de actividades y bienes de los electos.
9. Se publica agenda institucional del intendente.
10. Se publican datos de contacto de los miembros del gobierno.
11. Se publican datos de contacto de los miembros de la oposición.

Órganos de Gobierno

12. Información sobre la composición de los órganos de gobierno.
13. Sobre las competencias y calendario de trabajo de éstos órganos.
14. Nombres completos de personas responsables y sus funciones.
15. Se publican las convocatorias a sesiones del Concejo Deliberante y órdenes del día.
16. Se publican actas de las sesiones del Concejo, o boletines oficiales.

Rendición de cuentas

17. Se publican informes anuales de rendición de cuentas.
18. Se publica información sobre planes y programas en ejecución (Plan de Gobierno, Plan Estratégico, metas y objetivos de las unidades administrativas).
19. Se da información sobre Plan de Ordenamiento Territorial y otras normas de planificación urbanística y modificaciones.
20. Se publican ordenanzas municipales.



Presupuesto

21. Se publica presupuesto vigente.
22. Se publica información sobre la ejecución mensual del presupuesto.
23. Se publican modificaciones presupuestarias.
24. Se publica información sobre sostenibilidad fiscal y endeudamiento vigente.
25. Se publica la liquidación de presupuestos de ejercicios anteriores o la cuenta general.
26. Se publica la relación de puestos de trabajo y las respectivas remuneraciones.
27. No aplica al caso argentino.

Contrataciones y licitaciones públicas

28. Se publica información de concursos públicos y resultados.
29. Se publica inventario general del patrimonio del municipio.
30. Se publican todos los contratos formalizados.
31. Se publican las licitaciones en curso, metodología y criterio de selección.
32. Se publican las actas de los procesos de contratación.
33. Se publican las modificaciones de los contratos formalizados y sus prórrogas, licitaciones anuladas y anticipadas.
34. Se publica la relación completa de proveedores, adjudicatarios y/o contratistas y la cuantía económica.
35. Se publica el período medio de pago a proveedores.
36. Se publican los subsidios otorgados, las respectivas convocatorias y resoluciones.
37. Se publican convenios firmados y sus especificaciones.

Comunicación Institucional

38. Se publican costes y características de las campañas de publicidad institucional en los medios
39. Se publican nombres de las empresas o personas que han incumplido contratos.
40. Se publican noticias, informaciones y/u opiniones sobre las actuaciones de los miembros del gobierno relacionadas con la gestión
41. Se publican noticias, informaciones y/u opiniones sobre las actuaciones de los miembros de la oposición y/o de los grupos políticos relacionadas con el control de la gestión del gobierno.
42. Se publica información sobre el desarrollo de las sesiones del Concejo, lo presentado por los diferentes grupos políticos, el debate y los acuerdos.



Información General

- 43. Se publica información histórica sobre el municipio.
- 44. Se da información sobre la situación del municipio: datos sobre el término municipal, la diversidad social, económica, etc.
- 45. Se ofrece una agenda de actividades municipales y ciudadanas.
- 46. Se publica el contacto con la persona responsable de Prensa, Información y/o Comunicación de la Institución.

Participación ciudadana

- 47. Se da información en la web sobre la normativa vinculada a la Participación Ciudadana.
- 48. Se da información en la web de otros mecanismos o entes de participación: consejos territoriales, consejos de ciudad, consejos sectoriales, presupuesto participativo, etc.
- 49. Se publican las Actas de las reuniones de los otros mecanismos o entes de participación.
- 50. Se ofrece el directorio de las organizaciones sociales y cívicas del municipio y/o el registro de los grupos de interés.
- 51. Se ofrecen instrumentos de consultas y/o de participación sobre temas actuales de interés local.
- 52. Se ofrece en la web la relación de servicios que se prestan y los compromisos ante la ciudadanía.
- 53. Se proporcionan instrumentos para valorar los servicios y para presentar quejas o sugerencias sobre su funcionamiento.



ANEXO II

Municipios seleccionados por provincia de acuerdo a la población según Censo 2010

Provincia	Municipio	Población Censo 2010
CABA*	Buenos Aires	2.890.151
Buenos Aires	La Plata	787.294
Buenos Aires	Mar del Plata	593.337
Buenos Aires	Lanús	459.263
Catamarca	San Fernando del Valle de Catamarca	159.703
Catamarca	Valle Viejo	27.242
Catamarca	Santa María	17.030
Chaco	Resistencia	291.720
Chaco	Presidencia Roque Sáenz Peña	96.944
Chaco	Barranqueras	54.715
Chubut	Comodoro Rivadavia	177.038
Chubut	Trelew	99.430
Chubut	Puerto Madryn	81.995
Córdoba	Ciudad de Córdoba	1.329.604
Córdoba	Río Cuarto	158.298
Córdoba	Villa María	79.351
Corrientes	Ciudad de Corrientes	352.374
Corrientes	Goya	88.300
Corrientes	Paso de los Libres	45.805
Entre Ríos	Paraná	247.863
Entre Ríos	Concordia	152.282
Entre Ríos	Gualeguaychú	109.461
Formosa	Ciudad de Formosa	222.226
Formosa	Clorinda	52.837
Formosa	Pirané	20.335
Jujuy	San Salvador de Jujuy	260.316
Jujuy	San Pedro de Jujuy	60.420
Jujuy	Palpalá	52.631
La Pampa	Santa Rosa de La Pampa	103.241
La Pampa	General Acha	12.583
La Pampa	General Pico	57.669
La Rioja	Ciudad de La Rioja	180.995
La Rioja	Chilecito	49.432
La Rioja	Arauco	15.418

Notas: *CABA: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Fuente: Elaboración propia



Municipios seleccionados por provincia de acuerdo a la población según Censo 2010

Provincia	Municipio	Población Censo 2010
Mendoza	Guaymallén	283.803
Mendoza	Las Heras	203.666
Mendoza	Godoy Cruz	191.903
Misiones	Posadas	277.564
Misiones	Oberá	66.112
Misiones	Eldorado	63.931
Neuquén	Ciudad de Neuquén	231.780
Neuquén	Cutral-có	36.162
Neuquén	Centenario	34.421
Rio Negro	San Carlos de Bariloche	112.887
Rio Negro	General Roca	90.653
Rio Negro	Viedma	53.618
Salta	Ciudad de Salta	521.483
Salta	Tartagal	69.225
Salta	San Ramón de la Nueva Orán	82.413
San Juan	Rawson	114.368
San Juan	Ciudad de San Juan	109.123
San Juan	Rivadavia	82.641
San Luis	Ciudad de San Luis	169.497
San Luis	Villa Mercedes	111.391
San Luis	Merlo	17.084
Santa Cruz	Río Gallegos	95.796
Santa Cruz	Caleta Olivia	51.733
Santa Cruz	Pico Truncado	20.889
Santa Fe	Rosario	948.312
Santa Fe	Ciudad de Santa Fe	398.927
Santa Fe	Rafaela	92.945
Santiago del Estero	Ciudad de Santiago del Estero	252.192
Santiago del Estero	La Banda	106.441
Santiago del Estero	Termas de Río Hondo	32.166
Tierra del Fuego	Río Grande	66.475
Tierra del Fuego	Ushuaia	56.825
Tierra del Fuego	Tolhuin	2.626
Tucumán	San Miguel de Tucumán	548.866
Tucumán	Banda del Río Salí	68.054
Tucumán	Yerba Buena	58.001

Fuente: Elaboración propia